

Espacios en disputa: la interfaz urbana-rural entre la expansión urbana y la justicia territorial

Josué Ismael Vega Medina

Universidad Politécnica Salesiana Quito, Ecuador

jvega@ups.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0004-2507-7749>

“Espacios en disputa: la interfaz urbana-rural entre la expansión urbana y la justicia territorial” analiza las dinámicas de crecimiento urbano en zonas periurbanas, con especial énfasis en la parroquia Ricaurte, en Cuenca, Ecuador. Se plantea que la forma de producir espacio urbano en la interfaz urbano-rural no responde a una planificación equitativa, sino a intereses económicos y políticos que priorizan la especulación inmobiliaria y la industrialización, en detrimento de la sostenibilidad ambiental y la justicia territorial.

A través de una aproximación interdisciplinaria con un enfoque teórico-conceptual basado en la producción del espacio de Lefebvre, el realismo capitalista de Fisher y la complejidad de Morin, el estudio demuestra cómo la presión inmobiliaria fragmenta el territorio, impacta en los recursos naturales y desestructura los sistemas de producción agropecuaria tradicionales, junto con los modelos de vida que los sustentan.

Al abordar las tensiones generadas por la urbanización entre los residentes tradicionales y los nuevos habitantes vinculados a proyectos

residenciales e industriales, se evidencia una disputa por el uso del suelo y el acceso a recursos, particularmente el agua en los canales de riego. La pérdida de infraestructura agrícola y el deterioro de los corredores ecológicos, como las quebradas, reflejan un modelo de desarrollo que no reconoce la vocación productiva del territorio ni promueve la participación activa de las comunidades afectadas.

Finalmente, se proponen estrategias para contrarrestar la lógica desarrollista del modelo de reproducción del espacio urbano capitalista, buscando transformar el paradigma de planificación tecnocrática hacia una visión más integral. En ella, las quebradas, los corredores agroproductivos y los espacios colectivos deben ser considerados parte del sistema de espacio público, promoviendo alternativas de desarrollo más equitativas y sostenibles.

Introducción

La interfaz urbano-rural es un territorio en constante transformación, no solo física, sino principalmente en cuanto a las actividades humanas, las relaciones sociales y las presiones sobre los recursos naturales, como consecuencia de intereses económicos y políticos. Este territorio de límites difusos manifiesta un cambio y desplazamiento sostenido en función del crecimiento de las ciudades. Atraviesa tensiones que se expresan en la disputa sobre su uso y en la pugna entre la urbanización acelerada, la preservación de los ecosistemas naturales y la justicia territorial.

La planificación sobre estos territorios, al igual que su ausencia, ha conducido a procesos de fragmentación, exclusión y degradación ambiental, que afectan tanto a las comunidades que habitan estas áreas como a los nuevos habitantes que se trasladan a ellas, con nuevas densidades, actividades y demandas no siempre compatibles con la capacidad de carga del territorio, generando riesgos socioambientales (Campos-Vargas *et al.*, 2015), incompatibilidad de usos y presión sobre los recursos.

La expansión urbana ha sido impulsada por la lógica del mercado inmobiliario y el interés de actores privados con poder económico y político, que ven en estos espacios una oportunidad para la especulación del suelo y la industrialización, sin considerar los impactos en las actividades preexistentes, las dinámicas económicas, los ecosistemas y los recursos naturales. La falta de reconocimiento de las alternativas propias de desarrollo en estos espacios ha permitido la imposición de modelos de reproducción del espacio y de relaciones sociales (Lefebvre, 1974) que se desarrollan sin un enfoque de equidad social y ambiental, deteriorando las prácticas agrícolas tradicionales, el tejido social comunitario y la identidad territorial.

En este contexto, la parroquia Ricaurte, en Cuenca, Ecuador, se presenta como un ejemplo emblemático de las contradicciones del modelo de desarrollo actual. Históricamente una zona agrícola con un fuerte vínculo con los sistemas de riego y las prácticas comunitarias, Ricaurte ha sido transformada por la expansión urbana y la industrialización, lo que ha modificado el uso del suelo y alterado la vida cotidiana de sus habitantes. La instalación de fábricas, la urbanización desordenada de alta y mediana densidad, y la pérdida de espacios colectivos han fragmentado el territorio, generando conflictos entre los nuevos actores urbanos, las comunidades rurales preexistentes y la disponibilidad de recursos naturales como el suelo agrícola y el agua, necesarios para garantizar la soberanía alimentaria.

Este capítulo se basa en una revisión bibliográfica, utilizando el método deductivo y analítico, para estudiar la transformación de la interfaz urbano-rural en la parroquia Ricaurte, en la ciudad de Cuenca. Se analizan las dinámicas de expansión urbana y sus implicaciones en la justicia territorial y la equidad social. La revisión se ha llevado a cabo a partir de fuentes científicas relevantes, informes de organismos internacionales y estudios de caso en diversas ciudades. Para garantizar la calidad y actualidad de la información, se hizo una búsqueda sistemática en bases de datos científicas y motores académicos como Google Scholar,

Scopus y Web of Science, entre otros. Se utilizaron palabras clave como: *planificación territorial, justicia territorial, periurbano, interfaz urbano-rural, sostenibilidad territorial y gobernanza participativa.*

Desde una mirada interdisciplinaria que integra las perspectivas del capitalismo tardío (Fisher), la producción del espacio (Lefebvre) y el paradigma de la complejidad (Morin), se busca comprender cómo estas disputas territoriales reflejan tensiones estructurales más amplias, y qué estrategias podrían implementarse para reorientar la planificación y el desarrollo urbano hacia modelos más justos, desde la sostenibilidad y la inclusión.

A lo largo del texto se abordará cómo estos espacios en disputa pueden convertirse en oportunidades para innovar en la planificación y gestión urbana, mediante la articulación de estrategias basadas en la gobernanza participativa, el análisis crítico de la cartografía y el replanteamiento del espacio público. La finalidad es que la interfaz urbano-rural posibilite nuevas formas de habitar, diseñar y gestionar el territorio de manera más justa y sostenible.

Metodología

Este capítulo se basa en una revisión bibliográfica, utilizando un enfoque deductivo y analítico, sobre la transformación de la interfaz urbano-rural en la parroquia Ricaurte, en la ciudad de Cuenca. El análisis se centra en las dinámicas de expansión urbana y sus implicaciones en la justicia territorial y la equidad social.

La revisión se llevó a cabo a partir de fuentes científicas relevantes, informes de organismos internacionales y estudios de caso en diversas ciudades. Para garantizar la calidad y actualidad de la información recopilada, se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos académicas y científicas. Se utilizaron palabras clave como *planificación territorial, justicia territorial, periurbano, interfaz urbano-rural, sostenibilidad territorial y gobernanza participativa*, entre otras. A partir de esta revisión, se plantean

estrategias que pueden implementarse para reorientar la planificación y el desarrollo urbano hacia modelos más justos, sostenibles e inclusivos.

Resultados y discusión

La planificación en la interfaz urbana-rural y las dinámicas de expansión urbana

En primer lugar, la teoría de la planificación territorial dista aún de constituir un corpus doctrinal unificado (Benabent, 2014). Diversos paradigmas han servido de base para distintos enfoques sobre el deber ser y la metodología procedimental de la planificación. Desde la planificación como proceso creativo del autor, según Adams (1935), donde el planificador proyecta su personalidad y visión filosófica o artística en el plan, se evolucionó hacia la planificación racional comprensiva, basada en la objetividad del método deductivo de contraste propuesto por Popper (1934). Posteriormente, emergieron nuevos modelos de decisión, como la racionalidad limitada de March y Simon (1958), el incrementalismo de Dahl y Lindblom (1953), la elección estratégica de Friend y Jessop (1969) o el enfoque mixto de Etzioni (1967).

Hacia el último cuarto del siglo XX, la planificación se concibe como un proceso de investigación y aplicación, con un cambio sustancial en el rol del planificador: de experto a facilitador del diálogo y del consenso. Esto se evidencia en la planificación comunicativa de Forester (1989), sustentada en la teoría de la racionalidad comunicativa de Habermas (1981, 1984), y en propuestas que incorporan la participación ciudadana, como la planificación defensiva de Davidoff (1965), la planificación transitiva de Friedman (1973) y la planificación colaborativa de Healey (1997).

Considerando esta evolución, resulta fundamental debatir el proceso de planificación en zonas de transición donde convergen dinámicas urbanas y rurales. Este territorio, conceptualizado como interfaz urbano-rural, implica el reconocimiento del agotamiento del binomio tradicional

campo-ciudad. Se propone así un nuevo paradigma que, más allá del término *periurbano*, define la interfaz como el espacio donde existe interacción efectiva entre lo rural y lo urbano (Delgado y Galindo, 2009). Este espacio híbrido se caracteriza por la mezcla de usos del suelo, diversidad de actividades económicas y relaciones complejas entre los modos de vida, lo que exige una lectura profunda para su adecuada planificación y gestión sostenible.

La parroquia Ricaurte ha sido históricamente un territorio rural con fuerte vocación agrícola, estructurado en torno a los sistemas de riego. Durante décadas, el agua ha sido un eje fundamental para la producción agrícola y para la cohesión social, propiciando espacios de encuentro y cooperación comunitaria. La organización territorial ha girado en torno a redes de solidaridad, evidenciadas en prácticas tradicionales como las *mingas* en Ecuador (Bravo *et al.*, 2023) o el *mutirão* en Brasil (Pilote, 2011), utilizadas para el mantenimiento de canales de riego y otras infraestructuras comunales.

No obstante, con el crecimiento urbano de Cuenca, Ricaurte ha sufrido transformaciones profundas desde la década de 1990, impulsadas por la presión inmobiliaria y la instalación de industrias. Esto ha dado lugar a una integración conflictiva entre los usos agrícolas tradicionales y nuevos sectores residenciales, industriales y logísticos. La localización de industrias de alto impacto —como las dedicadas a la fabricación de tubos de PVC— ha suscitado preocupaciones ambientales y sociales, debido al uso de sustancias tóxicas y el elevado consumo energético, con efectos negativos en la calidad del aire y en los recursos naturales locales. La proximidad de estas industrias a zonas habitacionales y agrícolas agudiza los conflictos por el uso del suelo y la contaminación ambiental, comprometiendo la salud comunitaria y la sostenibilidad de las actividades agroproductivas.

Transición socioeconómica

Ante la complejidad del escenario territorial, caracterizado por múltiples procesos interrelacionados (Morin, 1993), la transformación del uso del suelo en la interfaz urbana-rural es un fenómeno cada vez más evidente. La conversión de tierras agrícolas en desarrollos residenciales, comerciales o industriales —impulsada por la demanda creciente de suelo urbano y la especulación inmobiliaria— ha conllevado la pérdida de tierras productivas, comprometiendo la seguridad alimentaria local.

La llegada de nuevos residentes, atraídos por la proximidad al centro de la ciudad de Cuenca, junto con la inserción de actividades económicas no agrícolas, ha alterado las estructuras sociales y las economías tradicionales, generando tanto oportunidades como tensiones. Esta urbanización ha provocado, además, una significativa degradación de ecosistemas naturales, particularmente de quebradas y cursos de agua superficiales. Mientras algunos aún proveen de agua de riego a sectores que mantienen prácticas agrícolas de subsistencia, otros han sido contaminados por descargas de aguas servidas, dando como resultado la pérdida de biodiversidad y deterioro de la calidad ambiental.

Por otra parte, la transición productiva en la interfaz urbana-rural debe entenderse como un proceso multidimensional en el que diversos factores interactúan de forma interdependiente. La irrupción de actividades urbanas y la llegada de nuevos habitantes transforman las dinámicas sociales y culturales, debilitando prácticas comunitarias tradicionales como la *minga* o la corresponsabilidad en el cuidado de quebradas y cunetas. A su vez, esta transformación provoca una constante reconfiguración de las identidades colectivas y de las estructuras económicas locales.

Reconocer que estas dinámicas emergen de una red compleja de relaciones impide analizarlas de manera aislada. En este contexto, los cambios evidencian la capacidad del capitalismo para penetrar todos los ámbitos de la vida social y cultural, presentando el modelo anterior como obsoleto o carente de alternativas viables. Este fenómeno puede

interpretarse a través del concepto de *realismo capitalista* (Fisher, 2009), en el que las comunidades, enfrentadas a las lógicas del mercado, se ven obligadas a adaptarse, sacrificando frecuentemente sus prácticas tradicionales y su cohesión social. Así se genera una sensación de inevitabilidad y resignación que limita la capacidad de imaginar formas alternativas de organización socioeconómica.

La desigualdad espacial en la interfaz urbana-rural se manifiesta no solo en carencias habitacionales e infraestructurales, sino también en mecanismos de diferenciación que inciden en las prácticas espaciales de los habitantes. Esta realidad afecta tanto a personas en situación de pobreza como a aquellas con procesos de integración precarios, quienes enfrentan complejas dinámicas de convivencia, inseguridad, estigmatización territorial y dificultades en la movilidad cotidiana.

Un ejemplo ilustrativo es la situación de la Sociedad de Riego de Ricaurte, cuya infraestructura hídrica se ve amenazada por desarrollos inmobiliarios que la consideran un obstáculo para maximizar la rentabilidad del suelo. Esto ha provocado una división entre habitantes que dependen del riego para sus actividades productivas y aquellos que perciben esta infraestructura como un símbolo de atraso o incompatibilidad con los nuevos usos urbanos del suelo. La coexistencia de prácticas agrícolas tradicionales con dinámicas urbanas modernas genera tensiones que reflejan una fractalización urbana, similar a la descrita por Hidalgo y Arenas (2011) en su análisis de Santiago de Chile, entre la “precariópolis” y la “privatópolis”.

Presión sobre los recursos naturales

En la búsqueda de una transformación radical hacia la sostenibilidad (Temper *et al.*, 2018), la presión sobre los recursos naturales en la interfaz urbano-rural no debe entenderse simplemente como un problema de sobreexplotación o desaparición de dichos recursos, sino como la manifestación de conflictos socioambientales que revelan profundas asimetrías

de poder y disputas en torno a modelos de desarrollo hegemónicos que reproducen el espacio según las necesidades del capital.

La creciente demanda de agua, suelo y otros recursos naturales no responde únicamente a requerimientos materiales de la urbanización, sino que también está impulsada por dinámicas de acumulación capitalista que privilegian el crecimiento económico por encima de la sostenibilidad ecológica y la equidad social. La expansión urbana no solo compromete la capacidad de carga de los ecosistemas locales, sino que profundiza las desigualdades en la distribución de beneficios y cargas ambientales. Tal como se observa en el caso de Ricaurte, resulta cada vez más difícil mantener los sistemas de provisión de agua para riego, mientras las políticas locales facilitan e incluso estimulan el aumento de la densidad poblacional y la instalación de actividades industriales y afines (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca, 2022).

La degradación ambiental y la competencia por recursos naturales —en este caso, agua y suelo— no pueden abordarse de manera reduccionista ni resolverse con soluciones tecnocráticas que omitan las dimensiones políticas, sociales y culturales subyacentes, las cuales tienden a favorecer los intereses del poder económico. Por ello, resulta fundamental considerar no solo la capacidad de carga de los ecosistemas, sino también la implementación de mecanismos de justicia ambiental y social. Estos deben permitir una redistribución equitativa de los recursos según su uso y garantizar la participación efectiva de la población en la toma de decisiones, evitando la expulsión de comunidades cuyo sustento depende del acceso al riego y otros bienes comunes.

Además, la crisis ambiental generada por la urbanización en la interfaz urbano-rural no constituye únicamente un problema ecológico, sino que es consecuencia estructural de un sistema que no contempla alternativas fuera del modelo extractivo y de crecimiento perpetuo (Fisher, 2019). En este contexto, la mercantilización de los recursos naturales y la progresiva privatización de bienes comunes —como el agua y la tierra— reflejan la lógica del *realismo capitalista*, en la cual la sostenibilidad se

convierte en una narrativa sin contenido transformador. Las soluciones convencionales, basadas en la regulación estatal o en mecanismos de compensación ecológica, tienden a reproducir el mismo sistema que genera las desigualdades, sin cuestionar sus fundamentos estructurales.

Por ello, se hace imprescindible promover procesos de cambio que alteren las relaciones de poder vigentes. Esto implica visibilizar y fortalecer movimientos locales que generen alternativas basadas en la autogestión colectiva de los recursos, como cooperativas, asociaciones, organizaciones barriales y comunidades, las cuales promueven nuevas formas de organización territorial que integran sostenibilidad ecológica, equidad social y producción local. En consecuencia, abordar la presión sobre los recursos naturales en la interfaz urbano-rural requiere no solo estrategias técnicas, sino un cambio paradigmático que cuestione los principios del modelo de desarrollo urbano dominante y fomente prácticas de resistencia y construcción de alternativas desde los territorios afectados.

Fragmentación del paisaje

La fragmentación del paisaje en la interfaz de Ricaurte no solo redefine la configuración territorial, sino que también afecta gravemente los sistemas ambientales, en particular las quebradas y corredores ecológicos, que históricamente han sido fundamentales para la biodiversidad y la actividad agrícola de la zona. Estudios previos han evidenciado cómo procesos similares han repercutido negativamente en otros territorios. Por ejemplo, Abad y Auquilla (2020) documentan en la cuenca del río Guayllabamba una disminución significativa en la calidad y la fragilidad visual del paisaje, especialmente en las quebradas que alimentan dicho río. Por su parte, Espinoza-Moreira y Vera-Cañarte (2019) analizan el caso de la ciudad de Manta, donde la expansión urbana priorizó el crecimiento inmobiliario sobre la conservación ambiental, transformando las quebradas en áreas degradadas. Ambos casos ejemplifican los efectos nocivos de una urbanización descontrolada y carente de criterios de sostenibilidad,

los cuales deterioran ecosistemas frágiles en las interfaces urbano-rurales, alterando su equilibrio ecológico y comprometiendo su funcionalidad.

Uno de los aspectos más críticos en la fragmentación del paisaje de Ricaurte es la progresiva interrupción de sus sistemas hídricos naturales. La urbanización acelerada ha conllevado la desaparición física de muchas quebradas, ya sea por su canalización bajo infraestructura vial o por su conversión en drenajes urbanos. Esto ha reducido considerablemente su función ecológica, desvinculándolas tanto de la red hídrica más amplia como del tejido social y de las prácticas comunitarias tradicionales. Este patrón, también observado en Guayllabamba, ha sido asociado con la compresión de bosques y la pérdida de áreas naturales, comprometiendo así la provisión de servicios ecosistémicos. La desconexión entre fragmentos de vegetación ha disminuido la resiliencia ambiental de los territorios, situación que en Ricaurte se manifiesta en la reducción de la biodiversidad y en la alteración del régimen hidrológico de sus quebradas, lo que ha incrementado tanto la frecuencia como la magnitud de las inundaciones. Un ejemplo reciente se observa en los barrios como “La Asunción”, en el sector de Tiopamba, donde se reportaron inundaciones severas durante el invierno (Inundaciones en Cuenca por desbordamiento de quebradas lluvias, 2025).

Asimismo, los resultados del análisis en la zona sur de Manta permiten comprender la fragmentación del paisaje en Ricaurte desde una perspectiva socioespacial. En dicha ciudad, la expansión urbana ha generado una segmentación del territorio donde coexisten viviendas de interés social con urbanizaciones cerradas, configurando fuertes contrastes en el acceso a servicios e infraestructura. Este fenómeno también es observable en Ricaurte, donde la urbanización no planificada ha fomentado procesos de segregación espacial que afectan directamente la sostenibilidad de los sistemas ambientales locales. La consolidación de conjuntos habitacionales sin una planificación integrada ha convertido muchas quebradas en zonas residuales, degradando su capacidad de regulación hídrica y su rol como espacios de conexión ecológica y social.

En consecuencia, la fragmentación del paisaje en Ricaurte responde a un modelo de urbanización que privilegia la expansión inmobiliaria por encima de la conservación ambiental, lo cual ha reducido progresivamente la funcionalidad de sus corredores ecológicos. Esta situación exige un replanteamiento profundo de la planificación territorial, que priorice la preservación de los sistemas naturales que estructuran el paisaje de la interfaz urbano-rural. Es fundamental reconocer que las quebradas y otros elementos hídricos no deben ser concebidos como obstáculos al desarrollo, sino como infraestructuras ecológicas esenciales para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia del territorio.

Justicia territorial en la interfaz urbana-rural

La justicia social en el territorio no puede analizarse sin considerar la distribución del espacio y el acceso desigual a los recursos en las zonas de interfaz. En contextos de rápida urbanización, como el de la parroquia Ricaurte en Cuenca, la expansión de la ciudad ha generado procesos de exclusión territorial y segregación socioespacial, en los que ciertos grupos ejercen mayor control sobre el acceso a infraestructuras, servicios y oportunidades económicas, mientras que otros son desplazados o marginados. Como afirman Israel y Frenkel (2017), la justicia espacial no se limita únicamente a la distribución equitativa de bienes y servicios, sino que también implica la capacidad de las comunidades para incidir en la configuración del espacio y en las decisiones que afectan su calidad de vida. Esta postura se alinea con lo planteado por Fainstein (2010), quien sostiene que la justicia urbana debe fundamentarse en tres principios: equidad, democracia y diversidad.

En este contexto, resulta pertinente analizar de qué manera han incidido las organizaciones vinculadas a los sistemas de riego y agricultura en el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) del cantón Cuenca y, en particular, en las disposiciones para la parroquia Ricaurte. Esta respuesta se clarifica al observar los embaulamientos que el sistema de riego ha

sufrido en los últimos años, como en el barrio La Florida y la calle Eloy Monje, próximos a una de las mayores fábricas del cantón: Plásticos Rival.

La expansión inmobiliaria en sectores estratégicos de la parroquia ha favorecido la consolidación de ciertos enclaves urbanos con acceso a infraestructura moderna, mientras que comunidades rurales y de menor poder adquisitivo enfrentan limitaciones en el transporte público, la sostenibilidad de sus medios de producción y el acceso a servicios básicos como el alcantarillado o el cuidado infantil. Este proceso refuerza una dinámica de diferenciación territorial, donde la ubicación geográfica determina en gran medida la capacidad de desarrollo y bienestar. Desde la perspectiva de la justicia espacial, esta desigualdad no es casual, sino resultado de decisiones políticas y económicas que priorizan determinados intereses.

La producción del espacio urbano está determinada por la estructura de poder (Israel y Frenkel, 2018), donde actores con mayor capital económico y social pueden incidir en la planificación territorial y en la asignación de recursos. En Ricaurte, esto se traduce en una distribución asimétrica de beneficios urbanos: proyectos de vivienda y desarrollos comerciales ocupan terrenos que antes eran dedicados a prácticas agrícolas y comunales, alterando las formas tradicionales de habitar el territorio. Este fenómeno no solo desplaza físicamente a comunidades de menores ingresos, sino que también limita su capacidad de participar en decisiones sobre su entorno. Un ejemplo es la reforma de una ordenanza que anteriormente impedía la expansión de la zona industrial y que, tras su modificación, permitió la implantación de aproximadamente 4,5 hectáreas de logística industrial junto a zonas residenciales de media y baja densidad (Diario *El Mercurio*, 2020).

La inequidad espacial en la parroquia no solo afecta el acceso a servicios, sino también la movilidad y las oportunidades económicas. La ubicación de nuevas urbanizaciones e infraestructuras sin una planificación equitativa ha generado barreras físicas y sociales que dificultan la integración de algunos sectores a la vida económica y cultural de la ciudad. Donde antes existían simples cercas o cultivos colindantes, hoy

se levantan muros altos, cercos electrificados y estructuras ciegas que marcan los nuevos complejos habitacionales, evidenciando un cambio en la forma de concebir y delimitar los espacios urbanos. Estas transformaciones perpetúan ciclos de desigualdad frente a quienes no han migrado hacia modos de habitar similares a los del centro urbano.

Todo lo anterior refuerza la necesidad de replantear los modelos de desarrollo urbano, donde la expansión no se rija exclusivamente por criterios de rentabilidad inmobiliaria, sino que incorpore principios de equidad y sustentabilidad. La justicia espacial se convierte así en un marco indispensable para orientar los procesos de transformación en las zonas de interfaz.

Estrategias para contrarrestar la lógica desarrollista en la producción del espacio urbano

1. Reconfiguración del ordenamiento territorial con enfoque de justicia espacial

Transformar la planificación territorial en un proceso más justo implica fortalecer una gobernanza participativa que garantice relaciones horizontales entre los actores del territorio. En América Latina, y particularmente en Ecuador, la urbanización ha estado dominada por dinámicas donde las decisiones son tomadas por élites económicas y políticas. No obstante, la implementación de mecanismos vinculantes de participación y fiscalización ciudadana puede convertir a la población en protagonista de sus territorios.

Instrumentos como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y el PUGS deben no solo incluir principios de sostenibilidad y equidad, sino también mecanismos concretos de codecisión y rendición de cuentas. Experiencias internacionales, como la de Barcelona, demuestran que institucionalizar la participación ciudadana permite a las comunidades incidir efectivamente en la regulación del uso del suelo (Lucero, 2020).

Aunque los Consejos Locales de Planificación están reconocidos en la legislación ecuatoriana (Asamblea Nacional, 2011), su aplicación ha enfrentado limitaciones: se han burocratizado, carecen de autonomía y han sido utilizados para legitimar decisiones previamente tomadas. Urge revisar estos espacios para que cuenten con independencia real, plataformas digitales obligatorias y mecanismos de auditoría pública. Asimismo, las comunidades deberían tener poder de veto sobre transformaciones que afecten su entorno o sus formas de vida.

2. Fomento de la propiedad comunitaria del territorio y control de la especulación

Desde el enfoque del derecho a la ciudad, controlar la especulación inmobiliaria y promover formas colectivas de tenencia del suelo son estrategias fundamentales. En Ecuador, el artículo 70 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Asamblea Nacional, 2016) establece la creación obligatoria de bancos de suelo, los cuales pueden ser utilizados para impedir la conversión indiscriminada de tierras comunales en suelo urbanizable, garantizar la vivienda social, preservar actividades agroproductivas y consolidar modelos de propiedad comunitaria.

Experiencias en Quito y Río de Janeiro demuestran que bancos de tierras, cooperativas de vivienda y fideicomisos comunitarios son herramientas eficaces para contrarrestar la lógica del capital inmobiliario. Además, permitir a los municipios administrar y transferir terrenos para fines públicos fortalece la función social de la propiedad, principio establecido en la Constitución ecuatoriana de 2008 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

Complementariamente, instrumentos como los impuestos progresivos sobre terrenos ociosos y la expropiación de tierras en desuso pueden contribuir a reducir la presión especulativa y redistribuir los beneficios del desarrollo urbano.

3. Implementación de corredores productivos y sostenibilidad económica

La producción del espacio público debe ser repensada desde una perspectiva integradora, que articule elementos ecológicos, sociales y productivos. Las quebradas, canales de riego y corredores agroecológicos no deben ser tratados como barreras urbanas, sino como infraestructuras fundamentales de conectividad ambiental y social. Estos elementos pueden articular circuitos de producción y comercialización local, transformando el espacio público en un bien común.

Desde el enfoque del *sumak kawsay* (Lang, 2022), es posible concebir un territorio que priorice la sostenibilidad y justicia social. En Ricaurte, esto implica consolidar reservas agroecológicas, mercados comunitarios y sistemas de distribución cooperativa que eviten el desplazamiento de poblaciones rurales y preserven sus modos de vida. Esta visión se opone a la lógica capitalista que homogeniza los espacios en función de la acumulación de capital, como advierte Jiménez-Pacheco (2018).

Conclusión

Se requiere un cambio estructural en el diseño y gestión de las ciudades, especialmente en las zonas de interfaz urbano-rural. Este cambio debe basarse en el reconocimiento del conocimiento comunitario, la equidad territorial, la participación vinculante y la sostenibilidad. Solo así será posible construir territorios inclusivos, resilientes y socialmente justos.

Referencias bibliográficas

- Abad-Auquilla, K. (2020). El cambio de uso del suelo y la utilidad del paisaje periurbano de la cuenca del río Guayllabamba en Ecuador. *Revista de Ciencias Ambientales*, 54(2), 68-91. <https://doi.org/10.15359/rca.54-2.4/>
- Asamblea Nacional. (2011). *Ley orgánica de participación ciudadana*. <http://bit.ly/3GtvZXC/>

- Asamblea Nacional. (2016). *Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo*. <http://bit.ly/44Mzi5A/>
- Asamblea Nacional Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. <http://bit.ly/4lw4NGs/>
- Benabent, M. (2014). *Introducción a la teoría de la planificación territorial*. Universidad de Sevilla. <http://bit.ly/404npFs/>
- Bravo, J. A., Murillo Pinos, A. S., Vaca Cárdenas, A., y Larrea Naranjo, C. (2023). La minga como práctica comunicativa que orienta la transformación social de los indígenas de Chimborazo, Ecuador. *Communication Papers. Media Literacy y Gender Studies*, 12(25). https://doi.org/10.33115/udg_bib/cp.v25i12.22921/
- Campos-Vargas, M., Toscana-Aparicio, A., y Campos Alanís, J. (2015). Riesgos siconaturales: Vulnerabilidad socioeconómica, justicia ambiental y justicia espacial. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 24(2), 53-69. <https://doi.org/10.15446/rcdg.v24n2.50207/>
- Delgado, J., y Galindo, C. (2009). Los espacios emergentes de la dinámica rural-urbana. *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, 37(147). <https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2006.147.7639/>
- Espinoza-Moreira, K. D., y Vera-Cañarte, M. F. (2019). Fragmentación del espacio en la periurbanización de la zona sur de Manta: Artículo de investigación. *Revista Científica FINIBUS - Ingeniería, Industria y Arquitectura*, 2(4), 10-18. <http://bit.ly/4eBzh7N/>
- Fainstein, S. (2010). *The Just City*. Cornell University. <http://bit.ly/3IbLqV2/>
- Fisher, M. (2019). *Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?* Titivillus. <http://bit.ly/3TkKb8l/>
- Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca. (2022). *Plan de Uso y Gestión de Suelo del cantón Cuenca*. Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca. <http://bit.ly/44MClur/>
- Hidalgo, R., y Arenas, F. (2011). Negocios inmobiliarios y la transformación metropolitana de Santiago de Chile: desde la renovación del espacio central hasta la periferia expandida. *Geographical Journal of Central America*, 2(47E). <http://bit.ly/4l7i9t7/>
- Inundaciones en Cuenca por desbordamiento de quebradas lluvias*. (2025, enero 8). Teamazonas. <http://bit.ly/4lgbKML/>
- Israel, E., y Frenkel, A. (2018). Social justice y spatial inequality: Toward a conceptual framework. *Progress in Human Geography*, 42(5), 647-665. <https://doi.org/10.1177/0309132517702969/>

- Jiménez-Pacheco, P. (2018). *La rebelión del espacio vivido*. [Ph.D. Thesis, Universitat Politècnica de Catalunya]. <http://bit.ly/4nwmibC/>
- Lang, M. (2022). Buen vivir as a territorial practice. Building a more just y sustainable life through interculturality. *Sustainability Science*, 17(4), 1287-1299. <https://doi.org/10.1007/s11625-022-01130-1/>
- Lefebvre, H. (1974). La producción del espacio. *Papers. Revista de Sociología*, 3, 219. <https://doi.org/10.5565/rev/papers/v3n0.880/>
- Lucero, M. de L. F. (2020). Gobernanza participativa, la experiencia de Barcelona. *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo*, 13. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu13.gpeb/>
- Morin, E. (1993). *El Método I. La naturaleza de la Naturaleza*. Ediciones Cátedra. <http://bit.ly/44tGYIC/>
- Pilote, S. (2011). *Solidarity vs. Individualism: The Power of Mutirão – RioOnWatch*. <http://bit.ly/4kstpiG/>
- Rayner, J., y Zamorano Villareal, C. (2021). Introduction: The Right to the City in Latin America. *City y Society*, 33(1), 59-70. <https://doi.org/10.1111/ciso.12397/>
- Redacción El Mercurio. (2020). USD 13 millones invierte la empresa Plásticos Rival en su planta. *Diario El Mercurio*. <http://bit.ly/3IdSQqC/>
- Temper, L., Walter, M., Rodríguez, I., Kothari, A., y Turhan, E. (2018). A perspective on radical transformations to sustainability: Resistances, movements y alternatives. *Sustainability Science*, 13(3), 747-764. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0543-8/>